

que pagaron en dicho mes de Setiembre. Apelada esta determinacion por el C. Administrador; y sustanciado el recurso conforme á derecho, fué confirmado por el Tribunal de Circuito de Puebla por sus propios legales fundamentos, en su sentencia de 3 de Julio anterior.

El que suscribe, considerando arreglada á derecho esta determinacion que causa ejecutoria conforme al art. 32 de la ley de 14 de Febrero de 1826, y no encontrando méritos para exigir la responsabilidad de los Jueces que han intervenido en este negocio, pide á esta 1ª Sala se sirva darlo por revocado.

México, Agosto 6 de 1874.—*Velazquez.*

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto 24 de 1874.—Por revisado, y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones y archívese á su vez el Toca.—*José María Iglesias.*—*Miguel Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*Ignacio Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*Luis María Aguilar,* secretario.

Es copia. México, Setiembre 2 de 1874.—*Enrique Landa.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas por el C. Lic. Eduardo G. Pankhurst, contra la Administracion de rentas de la Capital de aquel Estado, que le exige el uno por ciento sobre el numerario que debe exportar por el puerto de Matamoros, y contra el decreto número 92 de la Legislatura.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal, alegando en los términos prevenidos por el artículo 13 de la ley de 20 de Enero de 1869, expone: que de los informes y alegatos hechos en este juicio, debe insistir en su pedimento de 29 de Abril último, por sus razones siguientes.

Se funda la cuestion que se ventila ante la Justicia de la Union, de una interpretacion de ley, es decir, del artículo constitucional y de la ley del Estado, que ha sido reclamada por el C. Lic. Eduardo G. Pankhurst, como representante del Sr. D. Oscar Lorentzen que se ha negado á pagar el derecho de extraccion del dinero que tiene que exportar para cubrir compromisos en el extranjero, y que aprovechando la conducta particular de D. Agustín Catarccha para Matamoros, y tratándose de saber si el Estado ha invadido la esfera de la autoridad federal con su decreto, ó si en efecto tiene facultades para decretar el impuesto que motiva este juicio, y que en concepto del Promotor, la cuestion está bien dilucidada por el informe del empleado ejecutor del decreto, y lo expuesto por el interesado; pues no pudiéndose considerar el impuesto con los que propiamente se llaman de exportacion, no está comprendido en la prohibicion constitucional; porque en efecto, no conviene creer que el Congreso constituyente haya tenido intencion de privar de recursos á los Estados, atándoles las manos para

crecer sus rentas en que son soberanos é independientes; y aunque no puedan coartar el comercio general y particularmente el extranjero, y que se podían alcejar las relaciones internacionales de privar á los Estados de la multitud de fuentes de recursos para su subsistencia, hay mas grande diferencia; porque en las palabras exportacion é importacion, debe entenderse la introduccion é salida del territorio mexicano para los puertos y Aduanas marítimas y fronteras, y no debe entenderse del interior de los Estados, que no está en ninguna de aquellas condiciones; y porque siendo esta inteligencia la mas conforme al uso comun del lenguaje, es mas racional, por cuanto siendo odiosa la interpretacion de la ley por que viene á limitar los derechos de los Estados, y debe hacerse restrictivamente por la regla general de jurisprudencia, y porque el artículo 117 de la Constitucion dice: "las facultades que estan expresamente

reservadas á los Estados," con arreglo á lo dispuesto en el artículo 72 de la misma Constitucion. noliyo pidiendo se suya denegar el que solicita el C. Lic. Eduardo G. rest en nombre y representacion del Oscar Florentzen, é imponer al solicitante la multa señalada en el artículo 16 y orgánica. Zacas, 15 de Mayo de 1874. —

L. Licoon.

enora del C. Juez de Distrito.

tecas, 21 de Mayo de 1874. — Visto de amparo promovido por el C. uando G. Panthurst, en representacion de Oscar Florentzen, contra la Adiccion de rentas de la Capital, que le pago del uno por ciento sobre el io colocado para su exportacion por o de Matamoros, y contra la disposi el artículo 22 del decreto núm 92 oer egislatura, fecha 19 de Marzo del

si en lugar de oro ó plata que son los productos del Estado de Zacatecas, se extrajera azúcar, ó algodón con documentos para un puerto, estaría libre de derechos, porque era exportacion y estaría impedido el Estado para decretar impuestos sobre tal operacion.

El Promotor cree que entender así el artículo constitucional, es dar un golpe de muerte á la Federacion; y que no siendo este el espíritu de los Legisladores constituyentes, no puede hacerse tal interpretacion sin agravio notorio de los derechos de los Estados.

Y resumo. Primero: no es exportacion de sacar dinero ó otra cosa fuera del Estado, aunque saque documento para un puerto.

Segundo: por consiguiente, el decreto número 92 de 19 de Marzo del año próximo pasado de que se trata, no está comprendido en la prohibicion constitucional.

Tercero: el artículo 112 de la Constitucion por donde se atribuyen á los funcionarios federales, se entienden reservados á los Estados; pues suponiendo que haya verdadera duda, resultaría cuando mas, que no claramente definido en esta parte, los derechos de la Federacion y de los Estados es de entenderse que á estos les corresponde la facultad disputada; y hay otra circunstancia, que en concepto del Promotor que suscribe, que las razones expuestas por el Administrador de rentas, demuestran que no porque el comercio saque guías para los puertos, suele á veces, que ha pretesto de transacciones mercantiles imprevistas, se quedan los caudales en cualquier punto de la República y sacar la guía para defraudar los derechos de extraccion, siendo esto muy frecuente; pues todos los dias se vé, que el comercio, con el nombre de la ley de amparo, ha cometido todo género de abusos, como en el mismo Juzgado hay multitud de casos prácticos de tales abusos; y que volviendo á la primera parte de su razonamiento, cree que solo un ejemplo pondrá en claro la verdad que se discute, porque

de los
por el
Y. e
amparo
Panth
Sr. D.
citante
de la l
Zac
Jesus.

Sen

Zac
el jue
Lic. E
cion de
ministra
exige
numera
el puer
sicion
de la T

año anterior, por no estar autorizado el Estado de Zacatecas para imponer contribuciones sobre importaciones y exportaciones invadiendo las facultades del Congreso de la Union en la fraccion 9ª del artículo 72 de la Constitucion general, y con infraccion de la 1ª del artículo 112 del mismo Código. Vista la suspensión provisional; el informe de la autoridad; el pedimento y alegato del C. Promotor fiscal y la estimación para sentencia.

Considerando, primero: que el impuesto de uno por ciento llamado de extraccion, cuando recae sobre los capitales que se remiten al extranjero, sacando de la Gefatura de Hacienda las correspondientes guías, pagando a la misma oficina el cinco por ciento de exportacion, se convierte en un verdadero derecho de exportacion que el Estado cobra sin consentimiento del Congreso de la Union, como lo requiere la fraccion 1ª del artículo 112 de la Constitucion.

Segundo: que la moneda conforme a las leyes fundamentales del país, se considera y debe considerarse como una mercancía especialísima, que por lo mismo, debe estar sujeta a leyes y condiciones tambien especiales.

Tercero: que bajo este respecto, la moneda ha estado y está sujeta en su produccion, circulacion y exportacion, a las leyes federales; y esto es necesario en la República para no desnivelar su valor, por las contribuciones que impusieran los Estados, ademas de otras consideraciones relativas al derecho internacional y a las facultades constitucionales del C. Presidente de la República.

Por estas consideraciones y con fundamento de los artículos 72 fraccion 9ª y 112 fraccion 1ª de la Constitucion general, y lo dispuesto en la ley de 20 de Enero de 1869, sentenciando definitivamente este juicio, el Juzgado declara:

Primero: que la Justicia de la Union ampara y protege a D. Oscar Lorentzen, que sacó guías de la Gefatura de Hacienda

para la exportacion de numerario por el puerto de Matamoros, contra el acto de la Administracion principal de rentas de esta Capital y la ley del Estado de 19 de Marzo del año anterior, por la invasion de las facultades del Congreso de la Union; careciendo el del Estado de la autorizacion respectiva que marca el artículo 72 fraccion 9ª y de la autoridad competente para establecer impuestos sobre exportaciones, segun el artículo 112 fraccion 1ª de la Constitucion general.

Segundo: hágase saber; publíquese esta sentencia en el Diario Oficial del Estado; ságuense las copias respectivas para el Semanario Judicial, y remítanse estos autos a la Suprema Corte de Justicia para la revision de la sentencia.

El C. Juez de Distrito del Estado lo decretó y firmó. Doy fe.—Firmado.—
Manuel G. Solana.—Luis G. Chavez.

Es copia que certifico. Zacatecas, 22 de Mayo de 1874.—*Luis G. Chavez,* secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto 26 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Eduardo G. Pankhuist, ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas contra la Administracion de rentas de la Capital de aquel Estado, que le exige el uno por ciento sobre el numerario que debe exportar por el puerto de Matamoros, y contra el decreto número 92 de la Legislatura; visto el informe de la autoridad responsable; el parecer fiscal y la sentencia del Juez de Distrito.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion general, se declara: que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia del Juez de Distrito que otorgó el amparo al quejoso.

Devuélvanse estas actuaciones al Juzgado

de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Miguel Auza.*—*José María Lozano.*—*José María Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Simón Guzmán.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar,* secretario.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por Telésforo Alcanta, contra los procedimientos de los Jueces de letras de Celaya y Salvatierra, por haberlo condenado, el segundo, á la pena capital como plagio, y haberse creído el primero con derecho á hacer ejecutar la sentencia.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: Telésforo Alcanta promovió el presente recurso de amparo, quejándose de que en su persona se habían violado las garantías individuales consignadas en los arts. 13, 20 fracción 4ª y 5ª de la Constitución federal, en la causa que por el delito de plagio le instruyó el C. Juez de letras de Salvatierra, en la que fué condenado á la pena de muerte, cuya ejecución fué encomendada al C. Juez de letras de Celaya.

Se hace consistir la violación del primero de los artículos citados de la Constitución, en que la ejecución de la pena de muerte, una vez confirmada la sentencia del Juez de 1ª instancia por el Tribunal Supremo de

Justicia del Estado, y denegada la gracia de indulto, se encomendó, no al Juez del domicilio del acusado, sino al C. Juez de Celaya, en cuyo hecho el que suscribe, no encuentra un procedimiento anticonstitucional.

Telésforo Alcanta, fué juzgado y sentenciado por la autoridad competente, que es la garantía que expresa el art. 13 de la Constitución, sin que se haya objetado la competencia del C. Juez de Salvatierra, que fué la autoridad que juzgó y sentenció al quejoso.

Trasladado el reo de Salvatierra á Celaya, cuando el Congreso del Estado denegó la gracia de indulto, se hallaba en este último lugar, por cuyo motivo la ejecución de la sentencia se encomendó, por medio de exhorto, al C. Juez de letras de Celaya; pero la causa fué instruida y la sentencia pronunciada por la autoridad competente, estando en las facultades del Supremo Tribunal de Justicia designar el lugar en que debía ejecutarse la pena, valiéndose de las autoridades y medios legales.

Examinando la causa, que como prueba se ha agregado á este juicio, aparece: que Telésforo Alcanta fué careado con los testigos que depusieron contra él, y en cuyos testimonios se fundó el cargo, acerca del cual recayó la sentencia del Juez de Salvatierra. No es del caso examinar si los datos de culpabilidad que arrojó el proceso, son bastantes para justificar la sentencia que se pronunció, supuesto que este punto no tiene relación con las garantías individuales que se han invocado.

Aparece también en dicha causa, que el mismo Telésforo Alcanta designó la persona que había de ser su defensor, nombrando primero al Sr. Lic. D. Francisco Guisa, y después, por excusa de este Sr., al Sr. D. Pomposo Martínez. No existiendo en consecuencia, la violación del art. 20, en sus fracciones 4ª y 5ª de nuestro Pacto federal.

Respecto del art. 23 que también se cita en el escrito de queja, debe decirse que no